

El protagonismo de la sociedad civil contra el CAFTA y el TLC-Andino

*Richard A. Dello Buono**

Entre enero del 2004 y mayo del 2005, Estados Unidos ha mostrado cierto afán de imponer su proyecto hegemónico a lo largo y ancho de América Latina. Como ya se ha establecido por numerosos analistas críticos e independientes, esta campaña representa una estrategia sistemática para prolongar y profundizar el sistema neoliberal, aun en un contexto de crisis de ese modelo. La estrategia se constituye en las siguientes geopolíticas gemelas: 1) la imposición acelerada de acuerdos de libre comercio, como los de ALCA, CAFTA y varios acuerdos bilaterales, y 2) una agresiva militarización de la región, disfrazada como una concertada lucha regional contra el terrorismo y narcotráfico, muy compatible con la creciente necesidad de fortalecer los mecanismos de represión en varios países frente a la resistencia cívica. Esta ofensiva bípida de Washington, frecuentemente denominada "la Doctrina Bush", cuenta con la colaboración de varios Estados latinoamericanos, cuyos caracteres de clase se han formado en metástasis con las dinámicas neoliberales, y constituye una permanente amenaza a los sectores populares de la región en lo económico, político, ecológico y cultural. La estrategia apuesta por lograr la instalación de un contexto jurídico más sólido para el neoliberalismo, mientras se moviliza el uso de las fuerzas militares norteamericanas, junto con sus homólogas latinoamericanas, para reforzar la infraestructura regional de represión y contrainsurgencia.

Por otro lado, la creciente oposición por parte de los sectores sociales más perjudicados en la región, ha seguido evolucionando de acuerdo con estas condiciones cambiantes. Nacida en el contexto de la fragmentación social y el pensamiento único originado por el neoliberalismo en su fase inicial, la resistencia social latinoamericana conlleva unos innegables signos de desarrollo hacia su propia consolidación. Nos enfocaremos aquí en las tendencias de los países comprendidos por el CAFTA y el "TLC-Andino" durante el 2004 y la primera mitad del 2005. Quisiéramos destacar la sostenida presencia de movimientos multisectoriales durante este período, argumentando que lo acontecido en estos países muestra la paulatina conversión de las negociaciones de los TLCs, regionales y bilaterales en una clave referente unitaria. Junto a las protestas en contra de la guerra de Iraq y la creciente militarización de la región, estos factores han servido para inyectar más energía al protagonismo popular.

Creciente resistencia contra los TLCs

Las persistentes protestas contra la privatización de servicios básicos y la reducción de gastos sociales impulsados por los Estados neoliberales,

* Profesor de Sociología de la Universidad Dominica, Chicago, Estados Unidos, y profesor visitante de la Universidad Autónoma de Zacatecas, México.

han mostrado últimamente una tendencia de regionalizar su enfoque, prestando más atención a los procesos globalizados como la OMC, el ALCA y los megaproyectos como el PPP. En las zonas de América Central y de los Andes, podría observarse un creciente énfasis a partir del 2004 en los acuerdos de libre comercio bilaterales y subregionales. Los dos casos clave han sido el CAFTA-RD y el TLC-Andino.

Al inicio del 2004, las diferencias entre los gobiernos de Costa Rica y Estados Unidos fueron superadas, permitiendo así la firma del acuerdo CAFTA entre cinco países centroamericanos y Washington. Más adelante, en agosto del mismo año, el CAFTA se convirtió en el CAFTA-RD, cuando la República Dominicana firmó su inclusión con los demás Estados miembros, culminando así el proceso en el cual cada uno de estos países latinoamericanos había firmado previamente un TLC bilateral con Estados Unidos. Según el Departamento de Comercio estadounidense, el CAFTA-RD no deviene un sencillo acuerdo arancelario, sino más bien "un paquete de las normas más avanzadas en el siglo XXI para el comercio", algo que en su conjunto modificará por entero el ambiente de negocios a favor del intercambio de productos y de los negocios transnacionales. Unos 18 meses después de las negociaciones finales, el acuerdo de ratificación estaba todavía pendiente, debido a la oposición significativa en el mismo Estados Unidos.

Mientras los Estados comprendidos por el acuerdo pusieron el énfasis sobre la ratificación parlamentaria, el CAFTA-RD se convirtió en un importante objeto de protesta por parte de las movilizaciones sociales en los mismos países. En rechazo a un tratado con pretensión de convertir las concesiones selectivas al capital transnacional de ayer en derechos perpetuos fuera del alcance de sus leyes nacionales, los diversos sectores de la sociedad civil más perjudicados empezaron a concertar acciones nacionales y regionales en defensa de sus intereses. En pocas palabras, el acuerdo devino un relevante punto de referencia unificador de la resistencia.

Los principales actores de este drama son los trabajadores del sector público, los campesinos y los pueblos indígenas. En algunos casos, el sector estudiantil, las mujeres organizadas, los grupos ecológicos y los desempleados de barrios marginales, también han sido actores importantes en acciones multisectoriales que han evolucionado desde sus raíces en protestas contra el difícil acceso a los servicios básicos y las privatizaciones. En Nicaragua, por ejemplo, la Central Sandinista de Trabajadores participó en una acción anti-CAFTA en marzo del 2004, conjuntamente con sindicatos de sus países-vecinos, donde los manifestantes lograron cerrar cuatro pasos fronterizos en signo de protesta. El Sandinismo sigue siendo una fuerza política tanto movilizadora como presidenciable en Nicaragua, algo confirmado en las elecciones municipales de noviembre del 2004, cuando ellos ganaron la alcaldía de Managua junto a las demás ciudades más importantes del país. De igual manera, el FMLN sigue siendo en El Salvador la principal fuerza opositora en la política nacional. Aunque perdieron las elecciones presidenciales con el 37 % de los votos en marzo del 2004, su candidato Shafik Handel, del ala más izquierdista del partido, sigue siendo líder máximo de una fuerte presencia parlamentaria y de los movimientos organizados. Después de las elecciones, el FMLN declaró su intención de priorizar la oposición al CAFTA, a la participación

de tropas del país en Iraq y a la plataforma de privatización impulsada por el entonces presidente electo Tony Saca de ARENA. En julio del 2004, el Frente mostró su fuerza cuando miles de manifestantes celebraron la clausura del Quinto Foro Mesoamericano de los Pueblos con una marcha precisamente acerca de los temas prioritarios mencionados.

En Guatemala, en cambio, las elecciones nacionales al final del 2003 confirmaron la virtual extinción de la URNG en la vida política, al no superar el 3 % de la votación nacional, dejando a Oscar Berger y a su agrupación derechista GANA asumir el poder a mediados de enero del 2004. Aunque, durante la época electoral, los movimientos de la sociedad civil se concentraron en asegurar la derrota de Efraín Ríos Montt, rompieron su silencio inicial durante la visita del presidente mexicano Fox a Guatemala el 23 de marzo del 2004, cuando miles protestaron en la capital y las zonas fronterizas, en contra del PPP y los TLCs favorecidos por Fox y Berger. Una semana después, alrededor de 25 000 campesinos e indígenas llegaron a la capital en seguimiento a la misma protesta, coincidiendo con otras manifestaciones en varios puntos del país. El recién electo Berger les pidió “una oportunidad”, prometiendo respeto a los acuerdos de paz que pusieron fin a la guerra en 1996. Aunque las protestas se calmaron temporalmente por un anuncio de Berger sobre un plan de reducir el presupuesto del ejército y cerrar algunas bases militares en favor de iniciativas sociales, el 8 de junio se produjo un paro nacional de 48 horas en contra del CAFTA y a favor de la reforma agraria. Berger aún pudo lograr un acuerdo parcial al prometer la discusión del TLC con el país, difundirlo en idiomas mayas y proponer al Congreso una revisión del código penal sobre las ocupaciones de tierras por el campesinado. A pesar de su inicial disposición a dialogar, la tendencia en la segunda mitad del 2004 y la primera mitad del 2005, evolucionó hacia respuestas más represivas a los más frecuentes manifestaciones, poniendo énfasis en la colaboración con Washington. Cuando el 15 de marzo del 2005, Guatemala ratificó el CAFTA, las protestas fueron unas de las más grandes desde hace años y la represión policíaca resultó en la muerte de dos manifestantes.

En Honduras, el 1º de mayo del 2004 fue testigo de más de 30 000 manifestantes en Tegucigalpa para exigir la no-ratificación del CAFTA y el retorno de las tropas hondureñas en Iraq. Pero, en Costa Rica ocurrió el enfrentamiento centroamericano más interesante del año. El Movimiento Civil Nacional convocó a una movilización en defensa de los intereses del sector público hacia finales de agosto, en reclamo por la entrega del *status* monopólico a una transnacional española para la revisión periódica de todos los vehículos del país. Sobre esa plataforma, la protesta ganó el apoyo de varios sectores sociales en pocos días y se convirtió en una gran manifestación en contra del CAFTA. La vuelta a la normalidad culminó con un acuerdo parcial en el cual asuntos salariales y el monopolio fueron sujetos a revisión, mientras los ministros del Transporte y de Hacienda fueron forzados a renunciar y el equipo negociador del TLC también lo hizo de *motu proprio*.

En Panamá, donde hubo negociaciones de un TLC bilateral con Estados Unidos, las manifestaciones de los organizados sectores agrícolas y estudiantiles junto a los trabajadores del sector público, han resultado

constantes, con raíces en el rechazo a la reforma de la Caja de Seguridad Social. En mayo, el partido de la saliente presidenta Moscoso fue aplastado por la oposición encabezada por su némesis, Martín Torrijos del PRD, pero Torrijos dio continuidad al proyecto de Moscoso al propiciar la selección de Panamá como la sede del ALCA, apoyar el TLC con Estados Unidos y mantener la insistencia en la reforma de la seguridad social. Las protestas sobre lo último pusieron un rápido fin a la luna de miel de la nueva administración, con fuertes manifestaciones bajo la bandera multisectorial de FRENADESO, violentamente reprimida por orden de Torrijos durante mayo del 2005, con cierre temporal de la Universidad de Panamá. Torrijos logró la aprobación de la reforma de la Caja de la Seguridad Social el 1º de junio ante grandes protestas en la capital. En República Dominicana, las manifestaciones contra el CAFTA-RD y las privatizaciones también han sido intensas. Una coordinadora de grupos sociales organizó un paro nacional de 48 horas al final de enero del 2004, denunciando el TLC con Estados Unidos y una serie de reclamos sociales que fueron respondidos con una virtual militarización del país y seis muertos tras los violentos enfrentamientos. El presidente Mejía fue eventualmente derrocado en las elecciones de mayo del 2004 por el ex presidente Leonel Fernández del Partido de Liberación Dominicano, pero la nueva administración también apoya el TLC con Estados Unidos.

Si el CAFTA-RD ha constituido un importante objeto de protesta en América Central, la prioridad estadounidense para concretizar un TLC-Andino entre algunos "países más favorecidos" ha constituido el análogo en los Andes. En respuesta, los movimientos multisectoriales de Colombia, Ecuador y Perú también seguían cobrando fuerza. En Perú, la novedad del 2004 ha sido un importante crecimiento del movimiento cocalero, sumándose, como en el caso de Bolivia, a la correlación de fuerzas que amenaza permanentemente al gobierno neoliberal de Toledo con innumerables paros y protestas. Un paro cívico realizado el 14 de julio del 2004 por la Central General de Trabajadores del Perú, despertó un significativo apoyo al interior del país, debilitando aún más la administración gobernante. En Ecuador, el gobierno de Lucio Gutiérrez, también debilitado por incesantes acciones de los sectores populares, enfrentaba unos "levantamientos indígenas" patrocinados por su ex aliado CONAIE. Gutiérrez, quien decidió abandonar su base y ponerse firmemente en el campo neoliberal pro-estadounidense, encontró una respuesta popular en abril del 2005 a través de manifestaciones tan masivas, que el oficialismo ya no las pudo contener. En forma poco ceremonial, Gutiérrez tomó el camino del exilio, huyendo a Brasil. Tanto en Colombia como y en Bolivia, las protestas andinas contra el neoliberalismo han crecido en importancia. El tema transversal, desde mayo del 2004, ha sido el TLC-Andino entre Colombia, Ecuador y Perú, cuyas negociaciones se abrieron formalmente en ese mes.

Creciente represión y una tendencia hacia la militarización

Aunque algunos acuerdos parciales y netamente simbólicos se han logrado a través de las protestas, también ha habido una notable tendencia hacia el uso de métodos represivos. Quizá, la mayor represión se ha ejercido por la

administración Uribe, actuando en concierto con la intervención norteamericana, ha convertido a Colombia en el caso paradigmático del “neoliberalismo de guerra”. Bajo las modalidades militar (el “Plan Patriota”), jurídica (el “Estatuto Antiterrorista”) y policíaca (las detenciones masivas ordenadas por la Fiscalía), la imposición neoliberal, en un país históricamente resistente, ha resultado bastante violenta. Con las tropas norteamericanas activamente involucradas en el combate contrainsurgente, su presencia cada vez más frecuente en las zonas fronterizas es destacable. En octubre del 2004, la administración Bush ganó aprobación del Congreso para doblar la presencia de tropas estadounidenses en Colombia y aumentar la presencia de asesores civiles contratados por el Pentágono.

En Ecuador, país que sigue con su arreglo de permitirle al ejército estadounidense utilizar la base militar en Manta, los atentados contra los líderes sociales (por ejemplo, CONAI) y el uso de las fuerzas de seguridad contra las manifestaciones, volvían a ser la norma durante la última fase de la administración Gutiérrez. Su régimen trató de enfrentar las protestas con una ley de emergencia y una reformulación de la rama judicial favorable al ejecutivo. Pero su caída del poder en abril del 2005, ante las movilizaciones masivas de toda la sociedad civil ecuatoriana, sucedió cuando el comandante general de la Policía renunció a ser partícipe de la represión en la capital y las fuerzas armadas, no obstante los anuncios públicos en contrario, efectivamente le retiraron su apoyo. Mientras tanto, el presidente-vecino con la popularidad más baja del hemisferio, Alejandro Toledo, autorizó la entrada de tropas norteamericanas en el territorio peruano a partir del 2004, como parte de una estrategia antinarcótica conjunta. Eso hizo revivir un patrón establecido anteriormente por la dictadura fujimorista, cuando se permitió instalar una base aérea de Estados Unidos para operaciones antinarcóticas y contrainsurgentes.

En Centroamérica hubo semejantes tendencias entre el 2004 y el 2005. La presidenta Moscoso de Panamá impulsaba “el Plan Mano Dura” en las últimas semanas de su administración, con cientos de detenidos y la declaración de un toque de queda, mientras estudiantes y otros grupos protestaron por los medios represivos. Poco después, Moscoso autorizó una operación militar, incluidos miles de soldados estadounidenses, colombianos, ecuatorianos y peruanos, entre otros, en la Operación Panamá 2004 como una forma de poner en práctica un “rescate” al Canal de Panamá después de un ataque terrorista hipotético. La aplicación de leyes antimaras también seguía siendo tema en El Salvador, Honduras y Guatemala, donde las pandillas juveniles se han declarado por varios oficiales como la principal amenaza a la seguridad. Las “Maras Salvatruchas” seguían cobrando fama como una pandilla transnacional a través de su presencia en Guatemala, Honduras, El Salvador, México y las comunidades inmigrantes de esos países en Estados Unidos. El presidente de Honduras ha sido permanentemente amenazado por ellos, quienes curiosamente se identificaron, mediante una nota después de una masacre en San Pedro Sula en vísperas de la Navidad del 2004, como miembros de un “grupo de liberación popular nacional” y en Estados Unidos han amenazado a los vigilantes derechistas antiinmigrantes activos en la zona fronteriza con México. Las represivas medidas antimaras se reconocieron favorable-

mente por Donald Rumsfeld a mediados de mayo del 2005, cuando recibió en el Pentágono a los presidentes centroamericanos, de visita en promoción para la aprobación del CAFTA-RD, donde les habló de la necesidad de combinar una estrecha cooperación militar-policíaca con el TLC contra todo tipo de "terrorismo". El mismo discurso de Rumsfeld fue escuchado previamente en Ciudad de Guatemala durante su visita en marzo del 2005 para comprometer US \$ 3,2 millones en concepto de renormalizar la ayuda militar a Guatemala, la cual había sido cortada desde hacía 15 años. Las relaciones con el Comando Sur de las Fuerzas Armadas estadounidenses también se fortalecían en Honduras a través de una operación conjunta militar "Operaciones de Mantenimiento de Paz-Honduras 2004" en agosto y la persistencia de tropas salvadoreñas en Iraq, a pesar de crecientes protestas en contra.

La sociedad civil organizada lucha por la soberanía y la integración regional genuina

Las negociaciones del TLC-Andino constituyen un acuerdo comercial desarticulador a la Comunidad Andina de Naciones (CAN) y representa una anexión de sus Estados-miembro a la Iniciativa Regional Andina, patrocinado por el intervencionismo militar de la administración Bush. El CAFTA-RD también se desarrolla en un contexto de creciente represión y expansión de la presencia militar estadounidense. Ante estas amenazas a la soberanía, se presenta la visión alternativa de "otro mundo posible", basada en una integración regional genuina, netamente popular y organizada desde abajo. Este imaginario se presenta tras las concertaciones multisectoriales que se perfilan cada vez más fuertes en Centroamérica y los países andinos. En América Central, la sociedad civil organizada tiende a unirse en rechazo a los esquemas y megaproyectos de integración hegemónica (CAFTA-RD, PPP) y muestra poco entusiasmo por los viejos conceptos de integración entre los Estados (SICA). En los Andes se concentra en el rechazo de la intervención militar norteamericana, el control sobre sus recursos naturales y la condena a la represión utilizada cada vez con más frecuencia en su contra. La presión de las protestas organizadas en oposición al uso de tropas nacionales en la ocupación de Iraq, influyó en las decisiones de Nicaragua, la República Dominicana y Honduras de retirar sus tropas en el 2004, mientras en El Salvador, una fuerte campaña sigue exigiendo lo mismo.

Los trabajadores del sector público mantienen su *status* de actor social importante, forjando nuevos puntos de convergencia entre los campesinos y las organizaciones del agro, los sectores académicos, los pueblos indígenas, los cocaleros y otros sectores. Favoreciendo la regionalización de su agenda, la creciente presencia de los encuentros alternativos se constituyen en una fuerza articuladora, como se ha visto en el Quinto Foro Mesoamericano convocado en julio del 2004 en San Salvador, dando un alto perfil a la lucha en contra del CAFTA y el Primer Foro Social de las Américas en Quito a fines de julio, donde más de 10 000 activistas intercambiaron experiencias y plantearon mejores coordinaciones de protestas en contra de los TLCs y el ALCA.